

La economía mexicana, sus problemas y repercusiones sociopolíticas (1976-1983)*

Francisco R. Dávila Aldás

Introducción

El presente ensayo intenta describir la crisis económica experimentada por México desde 1976 y su profundización a partir de 1982, hecho que obligó al país a un viraje profundo de su política económica tradicional y que condujo a la nacionalización bancaria y al control estricto de cambios. A nuestro parecer, estas últimas medidas, casi desesperadas, a las que el gobierno anterior tuvo que recurrir en septiembre de 1982 y que el actual trata de reformular con el fin de contener los desequilibrios estructurales, que se manifiestan hasta el momento en una inflación incontrolable seguida por una crisis financiera sin precedentes en la historia del país, anuncian el colapso de un proyecto nacional de modernización basado en la industrialización sustitutiva. Esto da lugar a la difícil inauguración de un nuevo proyecto que intenta paliar la crisis económica por la vía de la negociación de la deuda externa y mediante la contracción del gasto público que, desde tiempos atrás, había constituido el impulso de las inversiones de mayor dinamismo.

Estas medidas, ya en proceso, que profundizan la dependencia económica del país y amenazan su soberanía, afectan de modo directo a los sectores sociales rurales y urbanos que fueron el sustento del anterior proyecto, por lo que pueden propiciar desequilibrios sociopolíticos de extrema gravedad que, en un mediano plazo, podrían romper la larga estabilidad del régimen político mexicano.

I. Antecedentes (1935-1970)

Los problemas actuales que experimenta la economía mexicana se remontan en lo fundamental a la configuración peculiar que ha adquirido la

* Ponencia presentada en el XI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), México, septiembre 28 a octubre 2 de 1983.

estructura socioeconómica y política de la formación social desde principios de los años cuarenta. Los estrangulamientos estructurales que se han sucedido hasta la fecha son, por tanto, el resultado de los desequilibrios económicos y sociales inherentes al desarrollo del capitalismo dependiente y oligopólico, pero con las peculiaridades propias de la rica historia sociopolítica del pueblo mexicano, que en sus momentos más críticos ha sabido recrear nuevas y expectantes realidades.

Ahora bien, la crisis económica de 1976 y la profundización de la misma a partir de 1982, caracterizada por ciclos consecutivos de inflación, recesión, devaluación y desequilibrios económicos y financieros cada vez más profundos, nace y crece en ese mar de fondo, pero se hace evidente y adquiere sus peculiaridades dentro del contexto más amplio de la crisis generalizada del capitalismo a nivel mundial que viene agudizándose desde los años setenta. Ésta prolonga actualmente su recesión inflacionaria, aun en los países más altamente industrializados, por lo que no es preciso desdeñar tampoco estos condicionamientos en la consideración de la actual crisis de México.

Con los primeros albores de la industrialización, México inicia a mediados de los años treinta una etapa de modernización rural-urbana que, en un lapso de veinte años, transforma repentinamente su fisonomía. De ser un país preindustrial, rural y campesino, con poderosas ataduras indígenas enraizadas en la tradición y el mito, se convierte en una nación de mediano desarrollo industrial con perspectivas extraordinarias de crecimiento económico y social. En efecto, la brusca, forzada y vertiginosa modernización, caracterizada por la utilización intensiva de la planta industrial ligera, destinada al consumo generalizado de la población,* y por un sector agrícola moderno de extrema eficiencia, revelaba en sus manifestaciones externas la dinámica pujante del capitalismo mexicano, hacedor del "milagro" del desarrollo económico sostenido y estabilizador hasta, por lo menos, fines de la década de los sesenta (Cordera, 1972).

Este proceso de crecimiento económico espectacular, que contribuyó a consolidar, desde 1935, la transformación sociopolítica que México experimentó a raíz de la gesta revolucionaria de 1910, se sustentó, entre 1940 y 1945, en el predominio de la industria claramente orientada hacia el mercado interno y en la creciente intervención estatal en la economía del país. Combinados, ambos factores contribuyeron a mantener la planta productiva al amparo de las oscilaciones violentas de los ciclos económicos internacionales, luego del proceso de inflación-devaluación que se desató en el primer decenio después de la segunda guerra mundial y que culminó con la devaluación de 1954. Lo anterior produjo, a partir de 1956, un nuevo auge del crecimiento económico acompañado de una estabilidad monetaria y de precios (durante ese periodo la tasa media de crecimiento del PIB fue de 6.6% anual y la tasa media inflacionaria de 4.7%, México,

* En 1930 México contaba con 16 millones 500 mil habitantes y en 1950 tenía ya 25 millones 700 mil, lo que significa un incremento real del 56% en ese lapso.

Nafinsa, 1978) que empezó a deteriorarse a partir de la década de los setenta.

Ahora bien, los destellos luminosos de este último periodo de la economía mexicana, llamado en los círculos gubernamentales "etapa del desarrollo estabilizador" (Ortiz Mena, 1969), no pudieron corregir las desigualdades sectoriales y regionales de la modernización capitalista, que aparece actualmente como un lastre estructural, ni menos aún ocultar las sombras de un desarrollo incapaz de mejorar las condiciones de existencia de las grandes mayorías. En los inicios de 1970, para los círculos económicos del poder mundial que miden el desarrollo social de un país en términos de crecimiento económico, de solidez monetaria y de solvencia crediticia, todo garantizado a futuro por una estabilidad política y una riqueza potencial debidamente probadas, México era en realidad un país muy afortunado. Pero no sólo los dueños de las finanzas mundiales establecieron pronósticos optimistas; los círculos gubernamentales y la opinión pública en general compartían también una visión futura llena de esperanzadoras ilusiones. Mas todo esto no era sino una verdad parcial. El México de principios de los años setenta tenía sus sombras, y su espectro no distaba mucho de parecerse al que proyectaban los demás países latinoamericanos, crecidos dentro de la racionalidad capitalista. A este respecto, Pablo González Casanova (1979:406-7) escribe: "Abandonado desde 1946 el proyecto nacionalista; se dio, sobre todo en los años cincuenta, un auge de monopolios y nuevos grandes propietarios del campo. A partir de entonces predominó el tipo de desarrollo dependiente característico del resto de América Latina, aunque con un Estado más fuerte y mayores desigualdades sociales." En efecto, México, a pesar de su extraordinario crecimiento, importaba en la década de 1970 alimentos y petróleo; en su territorio el nivel de desempleo crecía rápidamente, mientras la satisfacción de las necesidades de educación, vivienda, servicios sociales y sanitarios reflejaba un retraso de lustros. En el campo y en la ciudad los trabajos y el empleo se restringían al mismo tiempo que los ingresos de los obreros y campesinos respondían con retardo a los incrementos de precios, por lo que el mercado interno de productos se resentía con impactos negativos en el crecimiento de la planta industrial. La distribución del ingreso y de la propiedad eran cada vez más concentradas y las desigualdades regionales y sociales mayores. Los habitantes de las ciudades, en su mayoría empleados en el sector público o en los servicios de comercio y administración privados, comenzaban a sentir que sus ahorros ya no les permitían acceder a un *status* a la medida de sus crecientes obligaciones. En general, mientras el próspero mundo de los negocios incrementaba aceleradamente sus riquezas, miles y miles de mexicanos empobrecían en términos absolutos y relativos (Tello, 1979:13 y ss.). Así pues, las alternativas de vida se volvían cada vez más restringidas y los anhelos de participación política y cultural de los nuevos contingentes sociales, surgidos en las dos décadas anteriores de modernización y acumulación ingente de riquezas materiales, se veían constantemente frustrados.

II. El desarrollo con inflación en crisis (1970-1976)

El recuerdo amargo de la represión sangrienta del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, que al mismo tiempo cortó de un tajo el prestigio del gobierno y la estabilidad política —basados en la mediación estatal y en el compromiso, posibilitados gracias a la acumulación de un excedente social impresionante pero diferencialmente repartido— y liquidó para siempre la ilusión de un desarrollo económico sin fisuras, capaz de consolidar por sí solo las viejas bases sociales de un nacionalismo revolucionario ya desde hace años inerte, también sirvió de telón de fondo para reconocer que el proyecto nacional de modernización basado en la industrialización sustitutiva había fracasado parcialmente. En realidad, la acumulación del excedente social en las dos últimas décadas había sido extraordinaria; la planta productiva se había diversificado en amplias proporciones, pero las condiciones sociales de existencia de las grandes masas populares no habían mejorado. El progreso económico era innegable pero el bienestar social se había pospuesto y, con ello, se ponían en entredicho el fortalecimiento de la independencia económica y la soberanía nacional. A decir verdad, el Estado mexicano promovía exitosamente el desarrollo del capitalismo pero descuidaba su función primordial de dirección y unificación de la formación social que le había dado origen, poniendo así en peligro su propia existencia. Era, pues, conveniente rectificar el proyecto nacional de modernización que había permitido el surgimiento y la consolidación de un sector industrial poderoso y de un fuerte y disciplinado grupo de comerciantes y financieros ligados a una extensa red de empresas transnacionales, todos ellos empeñados en reforzar el patrón de concentración del ingreso en detrimento de una redistribución entre los sectores campesino, obrero y popular, base de la sustentación política del régimen.

La administración en turno criticó el modelo de desarrollo estabilizador, cuyos objetivos se fincaron en el incremento de la riqueza nacional pero olvidaron su redistribución, e intentó poner en marcha el “modelo de desarrollo compartido”, que propondría la redistribución de las riquezas generadas e incrementaría los ingresos y las oportunidades de empleo (Bueno, 1977:30). La aplicación del modelo propuesto exigía reformas a fondo: en el campo político para reforzar las alianzas y apoyos estatales en constante deterioro* y en la economía (González, 1977) para reorientar el proceso de desarrollo por la vía de la redistribución del ingreso, afectando las ganancias monopólicas de los empresarios y de las transnacionales. Esto hubiese conducido al Estado a modificar las condiciones estructurales de su propia existencia, las cuales son después de la revolución de 1910: hacer

* El estallido del 68, el abstencionismo eleccionario de 1970, el lento despertar de la insurgencia sindical independiente, así como los movimientos de lucha de los campesinos y colonos por tierras y vivienda y el deterioro visible de la estructura interna del PRI, marcaban el resquebrajamiento del sistema político mexicano.

cada vez más viable el desarrollo del capitalismo en México, dentro del contexto de dependencia internacional y de industrialización tardía; hecho que implica necesariamente restricciones cada vez más fuertes en el nivel de vida de las grandes mayorías y una intervención creciente del Estado en las áreas económicas donde la burguesía no quiere intervenir, es incapaz de hacerlo, o se revela ineficiente; de allí la inherente conflictividad entre éste y aquéllas y su incapacidad para solucionar el conflicto constante entre las clases dominantes y dominadas. Sin embargo, era necesario eliminar de alguna forma las tensiones sociales que ya habían forzado los primeros anillos del sistema político y corregir el rumbo de la economía, que se encontraba en difícil trance. En estas circunstancias, el gobierno de Echeverría se inicia con cautela, urgido por la necesidad de establecer reformas políticas prioritarias, pero también presionado por las dificultades económicas crecientes.*

La política contraccionista con la que se inicia el primer año de gobierno se explica como medida para contrarrestar las fuertes presiones inflacionarias surgidas en 1968 luego de la prolongada estabilidad de precios (en 1970 la inflación alcanzó el nivel más alto de los últimos cinco años precedentes: 5.02 medida en términos del índice de precios al consumidor y 4.5% en términos del deflacionador del PNB). Se intentaba también reajustar el desequilibrio externo que presionaba sobre la balanza de pagos, cuyo déficit en cuenta corriente creció en más del cien por ciento con respecto a 1969, alcanzando un valor de 945.9 millones de dólares (Villar, 1979:542). Pero a mediados de 1971 se empieza a notar la desaceleración de la economía y los riesgos crecientes que este proceso instaura en el empleo de mano de obra y en los programas sociales, piezas claves de la sustentación política del nuevo gobierno. Por lo que éste se vio forzado a cambiar el énfasis de su política económica.

A partir de 1972, la economía acelera su ritmo de expansión a través del gasto público financiado con endeudamiento externo (entre 1972 y 1973 el ritmo de crecimiento de la economía sube de 3.4%, en 1971, a 7.3% y 7.6% respectivamente). Se iniciaron, a su vez, ambiciosos programas de inversión y de seguridad social, acompañados de cambios legislativos y de reformas para hacerlos efectivos. Sin embargo, las contradicciones políticas internas y externas que afloraron a partir de este viraje económico, y que el gobierno tuvo que sortear, cancelaron muy pronto las esperanzas de un crecimiento económico acompañado de equidad. La reforma fiscal, destinada a intervenir sobre el capital acumulado para redistribuirlo, fue bloqueada por las fuerzas empresariales y transnacionales aliadas con los altos funcionarios financieros opuestos a la participación creciente del Estado en la economía de mercado. No obstante, los nuevos impuestos y las mejoras en la recauda-

* Ya en 1970 se dio una inestabilidad en la balanza de pagos que tuvo que ser corregida mediante restricciones monetarias que deprimieron la economía del país, pero luego, a mediados de 1971, los términos de intercambio al devenir favorables permitieron un flujo de inversiones privadas que dieron cierto desahogo a la economía.

ción fiscal, junto con la inversión fiscal deficitaria, se destinaron a la inversión pública para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, pero sobre todo con el fin de detener el deterioro económico de los sectores sociales mayoritarios.

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos emprendidos, los estrangulamientos productivos del sector agropecuario crecieron, incidiendo negativamente sobre la producción (entre 1965 y 1970 ésta creció en términos reales a una tasa anual del 2.7%, mientras de 1971 a 1976 sólo lo hizo a una tasa media de 0.9%, lo que equivale a decir un decrecimiento del orden del 66%). Por lo tanto, se tuvo que recurrir a las importaciones para cubrir este déficit. En ausencia de una reforma que liberase al sector industrial del excesivo proteccionismo, condición necesaria para una modernización de la planta productiva, éste perdía competitividad internacional y eficacia interna, con el correspondiente impacto negativo en la balanza de pagos y en la oferta de manufacturas. Así pues, la creciente demanda interna, impulsada por el gasto público y la rigidez de la oferta en el sector agrícola e industrial, acrecentó las importaciones y contribuyó con presiones adicionales a incrementar la inflación interna que era ya muy superior a la de los Estados Unidos. Todo esto, aunado al incremento del déficit presupuestal, aceleró el endeudamiento externo. Esto no sólo contribuyó a incrementar la dependencia económica y a debilitar la soberanía nacional, sino que constituyó el círculo vicioso que terminó con las posibilidades del crecimiento económico que tanto se había buscado. Pero, en realidad, en 1971 la fase depresiva del crecimiento económico empezó a ser superada gracias al gasto gubernamental deficitario financiado con endeudamiento externo, fácilmente alcanzable en el mercado internacional de capitales,* lo que dio como resultado inmediato la recuperación de la producción industrial en 1972-1973. Pero la inflación había ya empezado a arraigarse en el país. En 1970 la tasa inflacionaria sólo era de 4.5% mientras que en 1973 y 1974 alcanzó el 12 y el 24%, respectivamente. A su vez, el producto interno bruto, que creció en un 7.6% en 1973, sólo lo hizo en 5.9% en 1974. Conforme la inflación avanzaba, 16 y 22% en 1975 y 1976, respectivamente, el crecimiento económico se desaceleraba hasta que empezó a ser crítico; en 1975 creció solamente en un 4% y en 1976 apenas alcanzó el 0.6%. La crisis del desarrollo con inflación se había declarado y con ella se entraba en la recesión más profunda de los últimos treinta años. Aún más, desde 1973 la fuga de capitales, subsidiada por el tipo de cambio fijo, no sólo se incrementaba sino que se convertía por su volumen en un serio factor de desequilibrio económico y social (se calcula que en 1975 el monto de la fuga de capitales alcanzó los 2 mil 191 millones de dólares y en 1976 los 4 mil millones, cifras impresionantes si se considera que en 1976 la deuda externa de corto plazo fue

* En la década de los setenta, el excedente de liquidez existente en los mercados internacionales de dinero facilitó la decisión gubernamental de recurrir al endeudamiento externo para impulsar el desarrollo nacional. A fines de 1970 la deuda externa sólo era de 6 mil millones de dólares, mientras que en 1976 ascendía a 30 mil millones.

de 3 mil millones de dólares). El gobierno, no obstante, se oponía a la devaluación del peso porque estaba dispuesto a seguir solicitando préstamos para mantener las reservas y la continua convertibilidad de la moneda; además, políticamente no convenía avalar el deterioro de los ingresos reales de los sectores populares a causa de la inflación persistente* y, con ello, debilitar las bases institucionales de apoyo social necesarias para contrarrestar las presiones de la iniciativa privada, opuesta a la participación del Estado en la economía y deseosa de inmiscuirse directamente en la toma de decisiones políticas.

Pero en los primeros meses de 1976 la capacidad de pago del país, medida en términos de la reserva bruta del Banco de México, señalaba saldos negativos de 723 millones de dólares; el déficit del sector público ascendía a 4 478.16 millones de dólares y la deuda externa era de 19 600.2 millones de dólares (Banco de México, *Indicadores económicos* y Banamex, "México en cifras": 32-34); con ello se cerraban para México las puertas del crédito norteamericano y europeo por insolvencia económica. No se tuvo más remedio que acudir a la devaluación del peso que, por eufemismo, fue llamada "flotación del peso". En un lapso de menos de 5 meses, nuestra moneda tuvo cuatro diferentes paridades: de 12:49 pesos por dólar pasó a 19.7 en septiembre, a 25.4 en noviembre, a 19.95 en diciembre y alcanzó el nivel de 22 pesos en enero de 1977. Con la devaluación de 1976, los intentos de cambiar el modelo de "desarrollo estabilizador que era, de hecho, desestabilizador" (Reynolds, 1977), al de desarrollo compartido, quedaron truncados. La sociedad mexicana en su conjunto veía cómo sus ingresos reales, de la noche a la mañana, se habían deteriorado en casi un 50% por el mero hecho de una decisión política, convertida en la última herramienta económica para contrarrestar la inflación y el desequilibrio externo. La "percedera ilusión monetaria de buscar la equidad a través del gasto deficitario" (Solís, 1977), "sin entrar de lleno a reformar lo que constituye el sistema de privilegios y de protección desmedida del sistema de financiamiento, es decir, el no haber tocado al capital financiero (junto con los problemas estructurales y de coyuntura) fue lo que provocó, en realidad, la llamada crisis de 1976" (Tello, 1979: 208).

Así pues, lo que debió haber sido un nuevo proyecto de desarrollo nacional, con apoyo popular, resultó un "desarrollo estabilizador vergonzante" (*idem*) movido desde arriba por una tecnocracia económica y financiera que, favorecida por la debilidad creciente de la burocracia política, opuesta a sus perspectivas, pudo articular con mayor firmeza, puesto que efectivamente disponía de los canales operativos de las finanzas estatales (Fitzgerald, 1978:202), una alianza sólida entre los grupos económicos

* Aunque el nivel de salarios aumentó ligeramente entre 1970 y 1976, la inflación lo consumió rápidamente. Los sectores más afectados fueron los estratos populares urbanos. Además, la naturaleza de la tributación agudizó este deterioro, pues a partir de 1973 se bajó la carga tributaria a los ingresos del capital: si en 1972 la carga tributaria que soportaron los ingresos al trabajo fue 2.6 veces mayor que la que soportaron los del capital, en 1976 fue 4.3 veces mayor. Cf. Villar, 1979:550.

y financieros (Basáñez, 1981:164-165) opuestos a las reformas económicas y sociales que la estrategia de desarrollo compartido propiciaba (Flores de la Peña, 1976). En efecto, se trababa una lucha intensa en la arena social, en el campo económico, político e ideológico, para instaurar un nuevo proyecto nacional dirigido por el capital financiero y sus aliados externos, lo que explica las contradicciones políticas entre las diversas fracciones de la clase dominante y de algunos sectores del gobierno en la coyuntura de 1970-1976 (Labastida, 1972). El progresivo dominio del capital financiero en la economía del país (Alcocer, 1981), aunque coloca a esta fracción de la burguesía en la alternativa de disputar la hegemonía social (Gramsci, 1967) a la burguesía industrial, creada y protegida por el Estado y apoyada por los sectores obrero, campesino y popular, no la habilitaba automáticamente como interlocutora directa en el campo estatal de la toma de decisiones, ni la capacitaba, sin más, para que las grandes masas de la población mexicana le otorgasen su consenso para establecer su nuevo proyecto nacional. Ahora bien, la aceptación de éste implicó un cambio necesario en la estrategia de desarrollo, en la estructura vigente del poder, así como la neutralización o sustitución de la ideología nacionalista y revolucionaria, que es el cemento unificador de la formación social mexicana, después de la revolución y el cardenismo. De allí la necesidad urgente que experimentan los "intelectuales orgánicos" de la fracción financiera de influir decisivamente en la manera de utilizar la contrapartida financiera del excedente petrolero, que a partir de 1976 comienza a fluir, para incrementar la dependencia económica del gobierno y conseguir su debilitamiento político. Lo anterior equivaldría a socavar lentamente las bases objetivas sobre las cuales se fundamenta la hegemonía en deterioro del grupo burgués industrial que el Estado contribuyó a crear y que seguía sosteniendo en 1976, pero en un nivel más bajo que en el que se sitúa el financiero en el campo económico.

III. Crisis inflacionaria y recesión del desarrollo (1976-1982)

La crisis económica de 1976, su resolución coyuntural y su profundización en 1982 se producen dentro de un marco político de creciente debilitamiento del Estado para intervenir en la economía, en virtud de las presiones internas de la burguesía financiera, fuertemente consolidada y, por tanto, reacia a someter sus intereses a los de la burguesía industrial en crisis y por las exigencias externas provenientes de la creciente tendencia del capital financiero internacional al cual debe recurrir constantemente para financiar el gasto público dedicado a las inversiones de mayor dinamismo económico. Las contradicciones resultantes de este doble condicionamiento derivan en una seria amenaza, no sólo para el orden económico sino para el político y social. A decir verdad, el proyecto hegemónico en crisis parece entrar en una larga etapa de luchas de disolución que

culminará no sólo con el cambio de estrategia económica sino con un nuevo proyecto nacional (Basáñez, 1981:168).

a) Un difícil momento: 1976-1978

El nuevo gobierno de López Portillo inaugura su mandato dentro de los más serios problemas económicos de los últimos 35 años. Con la devaluación cambiaria de septiembre y las otras que siguieron hasta enero de 1977, la especulación de precios y los desajustes en la planta productiva del país, no sólo los sectores campesinos, obreros y populares, sino también los sectores medios y de profesionales, se vieron sujetos a un proceso de expropiación violenta pero solapada que no tardó en generar tensiones sociales. Los sectores obreros organizados presionaron al gobierno para obtener incrementos salariales; los campesinos, cansados de las soluciones jurídicas dilatorias a sus problemas ancestrales de tenencia de la tierra, llegaban a la violencia; entretanto, la burocracia de profesionistas y técnicos se aferraba en conseguir ingresos por la vía de la ineficiencia y de la corrupción administrativas. Sin embargo, la lúcida táctica política de devaluar el peso y de someterse parcialmente a los dictámenes del FMI, antes de la llegada del nuevo gobierno, acaecida en diciembre de 1976, si bien dejaron a este último maniatado en el mediano plazo, le permitían inaugurar una coyuntura política favorable de negociaciones sin recurrir al uso de la fuerza (López Portillo, 1976:1460), pero, eso sí, ceñidas a los mandatos del Fondo en lo relativo a la sujeción salarial y demás mecanismos restrictivos para contrarrestar la inflación y reducir el presupuesto (receta infalible de esta institución). Pero fue, sin lugar a dudas, el inicio del auge petrolero,* que garantizó a futuro una extraordinaria liquidez financiera, el que permitió que la fase recesiva no tuviera consecuencias más severas.

La balanza de pagos mejoró rápidamente durante los primeros seis meses de 1976-1977. Las exportaciones no petroleras crecieron en 11% mientras las importaciones tuvieron una caída del 22%; todo ello no sólo fue producto de las medidas devaluatorias sino del crédito amplio que recibió México como anticipo de sus cuantiosas exportaciones petroleras (según los informes de Pemex, el valor de las exportaciones petroleras aumentó en 1977 a 938 millones de dólares, o sea, 135% más que en 1976). Estas últimas permitieron al gobierno contar con recursos financieros para cubrir los montos elevadísimos de la deuda contratada por el anterior y endeudarse aún más con el fin de incrementar el gasto para hacer frente a la recesión inflacionaria.

Aunque la inversión pública no alcanzó en 1977 el nivel que había tenido en 1975, recuperó su ritmo de crecimiento real llegando al 12.2%; esto per-

* Entre 1977 y 1980, el sector petrolero aumentó su participación en el producto de 4.2 al 6.9%, respectivamente, mientras la participación del sector manufacturero pasó de 23.1 a 22.9% y la de la agricultura se redujo del 10.1% al 8.7%.

mitió acelerar en casi el doble (3.2%) el nivel del crecimiento del PIB, que en 1976 sólo había sido de 1.7%.

Para mediados de 1978, la economía mexicana acelera todavía más su dinamismo y tiene, al final del año, una tasa de expansión del PIB del 6.6%, lo que equivalía a un incremento del 106% con respecto a la de 1977. Este crecimiento tan rápido después de la crisis de 1976 se debió al inicio del auge petrolero que reactivó rápidamente la producción industrial interna. Para 1978, la producción de crudo mexicano ascendió a un millón 200 mil barriles diarios, cifra superior en un 23.5% a la registrada en 1977. Las exportaciones, a su vez, alcanzaron un valor aproximado de 1 800 millones de dólares, 80% más que el año anterior (CEPAL, 1979). Esta coyuntura económica favorable permitió al gobierno recuperar gran parte de su capacidad política para, de este modo, emprender algunas reformas encaminadas a acelerar la modernización del país que los albores del auge petrolero anunciaban. Todo ello causó un incremento sostenido de la demanda agregada, generado por el ascenso de la inversión fija pública, particularmente de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, puesto que el gobierno federal siguió, por razones de equilibrio presupuestal, manteniendo ciertas restricciones al gasto. La inversión privada también se incrementó para generar demanda, aunque no en la magnitud del clima de confianza que el gobierno supo crear con la alianza para la producción y los subsidios e incentivos fiscales que recibieron los empresarios para mejorar su rentabilidad y la tasa de acumulación de capital. A su vez, los gastos de consumo de los grupos medios y de altos ingresos también contribuyeron al incremento de la demanda y consolidaron una oferta interna de bienes suntuarios con alto contenido de insumos importados. Por su parte, la producción de bienes destinados a ensanchar el consumo corriente de las grandes mayorías, no tuvo un incremento significativo a pesar de los subsidios del gobierno a los empresarios.

Así pues, pese al constante ingreso de divisas por el incremento de la actividad petrolera y de ciertas exportaciones manufactureras, la recuperación industrial significó mayores egresos por importación de insumos y bienes de capital, lo que incidió de modo directo en el déficit de cuenta corriente que creció en un 57% más que en 1977 y alcanzó la cifra de 2 460 millones de dólares, un poco más de la mitad del déficit registrado en 1975. No obstante, los ingresos de capital en 1978 alcanzaron no sólo para cubrir adecuadamente el déficit en cuenta corriente sino para incrementar las reservas internacionales en 222.5 millones de dólares, evitando así presiones en el tipo de cambio, que mantuvo su paridad inalterable a pesar de la flotación a la que fue sometido, y contribuyendo a detener la inflación y a restituir la confianza interna e internacional en la moneda mexicana. Todo esto dio lugar a que comenzaran a retornar al país una cantidad considerable de capitales, alentados por el alto diferencial en las tasas de interés que se estaban pagando. Estos últimos, junto con los ahorros internos producto de la acelerada expansión económica, fortalecieron el aparato bancario y financiero que, en las nuevas condiciones

creadas por el auge petrolero, fue vinculándose más estrechamente con los círculos bancarios y financieros externos, dispuestos a prestar capitales inactivos por la recesión de sus economías, para financiar el desarrollo por la vía fácil del endeudamiento externo.

La recuperación de la economía mexicana, producto no tanto de la cura monetaria estabilizadora drástica aplicada en 1977 bajo presiones del FMI, sino de la ingente cantidad de recursos petroleros que fueron vendidos, era una realidad en 1978. Se había logrado superar la crisis financiera en un tiempo récord y el dinamismo alcanzado por la planta productiva permitió mejorar las condiciones precarias de la economía generadas por la inestabilidad inflacionaria. Pero, por desgracia, la adopción de metas de crecimiento tan elevadas, entre el 8 y 9% anual a partir de 1978, empezó a ejercer dura presión sobre el aparato productivo industrial no petrolero y la producción manufacturera se desaceleró y propició el desempleo, con incidencia negativa sobre el nivel de vida de los trabajadores. Este hecho contribuyó a profundizar aún más los desequilibrios estructurales que aquejaban ya a la economía mexicana de los años setenta. La sujeción salarial a la que fueron sometidos los sectores trabajadores, tanto por instrucciones del FMI como por medida política directa para derivar el ingreso global de éstos sobre las ganancias y recuperar la confianza de los empresarios, dio como resultado para 1977 un descenso del índice promedio mensual del salario real de 0.64% y un crecimiento de sólo 1.68% para el índice promedio mensual del salario industrial con respecto a 1976. En 1978, el salario real disminuyó en una proporción de 2.3% menor que la del 9% de 1977, circunstancia explicable, en parte, por la moderación de las presiones inflacionarias, pero sobre todo por el incremento de las luchas de los trabajadores organizados que forzaron los topes salariales de incremento de un 12% hasta un 20% en promedio (Informe de la Secretaría de Programación y CEPAL, 1979).

Una vez más, y como una constante del desarrollo capitalista en México, el crecimiento económico había vuelto a ser dinámico pero profundizando las desigualdades sociales que, a la larga, pueden terminar con el consenso social que éste requiere. De allí que el Estado, por intermedio del gobierno, intente superar esta contradicción al afirmar con un voluntarismo enfático: "Estamos por superar la crisis económica que tuvo su momento más drástico a fines de 1976. Lo hemos sabido afrontar. Era lo urgente. Vamos ahora a enfrentar lo importante, lo más serio que ha vivido México en toda su historia, la crisis de fondo, el problema social" (López Portillo, Segundo informe presidencial). Como se puede colegir de lo anterior, el gobierno había adoptado implícitamente la estrategia del desarrollo estabilizador, productor de la crisis: crecer para luego repartir. Vendría, entonces, el momento del reparto. De un modo global y simplista se podría afirmar que todo sucedió así, pero la magnitud de la riqueza petrolera, la robustez y complejidad de las instituciones mexicanas con sus intrincados mecanismos de organización y de control político fueron efectuando con perspicacia y tino consumados repartos continuos que permitieron al gobier-

no sortear sin mayores desajustes la fase aguda de la crisis. Por la vía indirecta, pero segura, de la asignación política de recursos: distribución de tierras, facilidades de crédito, permisos y concesiones, empleos y prebendas, los aparatos gubernamentales y administrativos del Estado habían sabido morigerar las tensiones sociales generadas entre los grupos sociales que soportan al poder estatuido, y conservar el consenso social necesario para cualquier acción de reajuste crítico. Sin embargo, el mismo gobierno, brazo visible de la dominación y de la organización social que el Estado promueve, al mismo tiempo, en nuestras sociedades capitalistas, ya avizoraba la profundización de las desigualdades existentes y las tensiones sociales que ellas acarrearán, las cuales son una constante amenaza para la capacidad de respuesta política tan elástica que el Estado mexicano ha demostrado a lo largo de más de 50 años. De nueva cuenta, se había vuelto a crecer, a generar confianza en el sistema; el reto era pues distribuir, con mayor abundancia, la riqueza acumulada, paliando con extremo cuidado las tensiones sociales acumuladas. Esta estrategia apenas esbozada en el análisis ha sido una preocupación constante de todos los gobiernos a partir de 1968, momento en que el consenso social y la credibilidad en la solidez del sistema tuvieron su primer colapso. En el discurso del presidente en turno, que pudo sortear el primer momento de la crisis que se profundizaría en 1982, existe esta constante preocupación por la inminencia del desajuste social que puede tensar las invisibles fuerzas de la dominación cuando el consenso se pone en crisis. En una de sus alocuciones anteriores a la finalización del año de 1978, y al referirse al uso de los excedentes petroleros para proyectos de desarrollo, extrema cuidadosas indicaciones; estos recursos deberán: "estar orientados a la generación de empleos, a combatir la miseria extrema", además de servir para desarrollar una política industrial "que supere el que se llamó 'desarrollo estabilizador' que, rechazado en años pasados, siguió vigente como un desarrollo estabilizador que yo llamo vergonzante" (*El Día*, 30 de noviembre de 1978).

Pero para fines de 1978 el crecimiento con inflación ya se había enraizado en la economía mexicana. Aquélla, cuyo significado real es la transferencia brutal de recursos de las mayorías a las minorías concentradas y cuyas características sociales se reflejan en la institucionalización y en el acrecentamiento de los desequilibrios estructurales de la formación mexicana, daría al traste con el voluntarismo moral, expresado al margen de la férrea ley de la desvalorización del trabajo frente al fortalecimiento de la acumulación del capital por la vía de la especulación financiera más espectacular y efectiva de la historia del país. Ello pondría, otra vez a prueba la elasticidad y fortaleza decrecientes del Estado mexicano para afrontar los desajustes sociales que amenazan con romper la estabilidad del régimen político.

b) Las ilusiones de un auge repentino: 1979-1981

Para comienzos de 1979 la economía mexicana se hallaba en pleno crecimiento. El auge petrolero brindó la oportunidad de atacar de modo general los problemas de la economía en el frente interno y gubernamental y los de la política entre los empresarios y los sectores obreros sin mayores presiones. Las grandes erogaciones estatales para reforzar la capacidad productiva de Pemex se saldaban fácilmente aunque con cierto rezago con respecto a las exportaciones petroleras. El gobierno, con la seguridad de contar con mayores recursos financieros internacionales, amplió sus gastos; éstos, en términos reales, crecieron aceleradamente.* Al mismo tiempo, los precios de los energéticos prácticamente se congelaron, con lo que la demanda de bienes y servicios se reactivó y la inversión privada experimentó un nuevo crecimiento; sin embargo, esta medida constituyó un subsidio muy elevado para el gasto suntuario de los sectores de altos y medianos ingresos y una ampliación de los márgenes de ganancia de los empresarios. Por otro lado, la oferta agregada se mostró reacia a seguir el mismo ritmo que la demanda. Los cuellos de botella que ya habían aparecido a fines de 1978 se convirtieron en mayores obstáculos en 1979. Las industrias del cemento, del aluminio, del acero, del cobre, del papel y la de llantas y cámaras, así como la de la química básica y la de fertilizantes, agotaron sus excesos de capacidad y experimentaron problemas de expansión. En general, la producción total creció, para fines del segundo trimestre de 1979, sólo en un 10.4% en relación con el mismo período de 1978; mientras en el primer trimestre su crecimiento fue del 12.5%, lo que en términos percentuales significa una disminución neta del 2% en un corto lapso.

También la productividad de la industria manufacturera sufrió un decremento de un 30% en relación a 1978. Todo ello ocasionó notables incrementos en las importaciones y una presión constante sobre los precios de la mayoría de productos, lo cual profundizó la inflación ya existente que pasó del 7% en 1978 al 22% en 1979.

Poco a poco, a partir de 1980 en la economía del país y en la sociedad se venían insinuando las tendencias a la petrolización cuyos efectos negativos irían anulando los positivos, muy a pesar de que el gobierno no dejaba de estigmatizar a los "agoreros de catástrofes". Una vez más, como en los años anteriores, el gasto público, fundado en la bonanza petrolera fue el principal dinamizador de la economía. Su crecimiento en términos reales, en 1980, es de un 19% con respecto al 14% de crecimiento en 1979, lo que significa un incremento del 35%.

* Entre 1977 y 1981 el gasto público aumentó casi en un 50% y la inversión pública se duplicó en términos de volumen a precios constantes; mientras que, en términos corrientes que permiten señalar con mayor precisión la expansión de ambos rubros, en el mismo período el gasto público se triplicó y la inversión pública se cuadruplicó.

No obstante, el PIB, del orden de un 8% en 1979, decrece a solamente un 7.5% en 1980, lo cual revela la vulnerabilidad de un crecimiento basado en el alza coyuntural de los precios del petróleo a nivel internacional* y no en el incremento de la planta productiva y de la productividad de la misma. En efecto, exceptuando la producción petrolera que crece del 22.6% en 1979 al 33% en 1980, y las actividades de la industria de la construcción, las demás decaen en su ritmo de crecimiento, con una mayor desaceleración de la producción manufacturera y la eléctrica.

En 1980, la economía mexicana trabajó al límite de su capacidad y las presiones se multiplicaron, pues se perciben más claramente que en 1979 las insuficiencias de la infraestructura de transportes, la falta de materias primas e insumos, los cuales se deben, necesariamente, importar para no frenar la producción.** Esto demuestra la fuerza de la petrolización de la economía y sus incidencias negativas en el desarrollo de la planta industrial no petrolera. Sin demora, más a carrera de liebre que a paso de tortuga, los estrangulamientos en el sector industrial se agudizaban y el estancamiento y retroceso del proceso de industrialización sustitutiva se hacían evidentes. Muy poco sirvieron los ajustes fiscales de 1979 y 1980 y la decisión del gobierno mexicano de no ingresar al GATT. Los cambios en la política económica, en aras de tornar el aparato productivo más eficiente y capaz de competir sino con ventaja al menos en igualdad de condiciones en el mercado internacional, ayudaron muy poco; las resistencias políticas de los sectores comerciales, industriales y financieros monopólicos internos eran muy fuertes y el gobierno no tenía la menor intención de oponerles resistencia. En verdad a partir de 1978 estos últimos habían consolidado, más que en ninguna otra época, su poderío económico y caminaban hacia su consolidación política gracias a los márgenes de utilidades extraordinarias alcanzados tanto por el encarecimiento del dinero, la implantación del IVA y la liberación de los precios de los productos, como por las políticas de contención salarial aplicadas y los subsidios que el gobierno les concedía constantemente para no violentarlos en su contra. A su vez, los sectores empresariales junto con el agresivo grupo financiero, enquistado en la banca y en un buen número de empresas, contribuyeron desde los inicios de 1980 a la aceleración de la dolarización bancaria, aprovechándose de las expectativas inflacionarias y del crecimiento de las tasas de interés previstas para captar ahorros de los sectores medios, y destinando estos recursos no a las inversiones productivas, como lo pensaba el gobierno, sino a la especulación inmobiliaria y financiera.

Si en 1979 las dificultades de financiamiento ya se hacían sentir muy fuertemente, en 1980, éstas se tornaron más agudas: en el último trimestre de 1980 las tasas pasivas sobre depósitos a un año pasaron del 15 al 24%,

* En diciembre de 1978 los países de la OPEP decidieron alzas escalonadas del precio del petróleo que entraron en vigor el primero de enero de 1979.

** La compra de bienes de producción en el exterior representa el 87% del total de la estructura de las importaciones de México en 1979. De éste, el 68.3% corresponde a materias primas y auxiliares y el 31.7% a bienes de inversión.

en promedio, y las activas del 21 al 31%, en promedio. La falta de liquidez bancaria y las dificultades crediticias incidieron en forma negativa en toda la producción, pero afectaron principalmente a los pequeños y medianos productores. Las manufacturas importadas empezaron a llenar los mercados del país, favorecidas por la disminución de permisos previos. No sólo se importaron bienes de consumo no duradero, de lujo y suntuarios, sino también productos agropecuarios por un valor del 16% del total de importaciones hechas. Como efecto de este comportamiento de las importaciones, el déficit total en cuenta corriente pasó de 4 856 millones de dólares en 1979 a 6 597 en 1980, según informes del Banco de México. La apertura de la economía mexicana al mercado de importaciones para superar sus estrangulamientos, receta infalible del FMI y de los sectores financieros imperialistas que lo comandan, en lugar de frenar las presiones de la demanda interna las incrementaron. Una industria ineficiente y protegida en extremo, fuertemente dependiente de las importaciones y con escasa competitividad internacional, no podía, simplemente, resistir este embate. Así pues, los ingresos petroleros se convirtieron en subsidiadores de las importaciones y aceleraron el proceso de acumulación de utilidades de las industrias monopólicas internas, acentuando así la concentración de la riqueza social por la vía de la inflación creciente, cuya expropiación compulsiva contribuyó no sólo a multiplicar los desequilibrios económicos y la marginación social sino la dependencia externa del país.

c) Los primeros indicios y el estallamiento de la crisis: 1981-1982

Al analizar la evolución económica de 1980, ya se percibían claramente algunos de los elementos de la crisis, pero éstos comenzaron a ser más visibles en 1981. En ese año el crecimiento de la economía, medido en términos del PIB, experimenta, en general, una ligera baja. Según datos de la CEPAL, éste fue del 8% mientras en 1980 alcanzó el 8.4%.^{*} El crecimiento de la demanda global siguió aún muy elevado por el impulso de las altas magnitudes del gasto público y por las inversiones privadas. Sin embargo, por primera vez después de cuatro años, la tasa de crecimiento del valor nominal de las exportaciones de petróleo decreció de un 94% promedio a sólo el 40% y las exportaciones del sector petrolero sólo alcanzaron una tasa del 40%, experimentando así una disminución del 112% con respecto a la de 1980. Esta notable caída del producto más importante de la economía mexicana, que en 1981 representaba junto con sus derivados más del 80% de las exportaciones de mercancías del país y más del 50% de las exportaciones totales de bienes y servicios, se explica, fundamentalmente, porque a mediados de 1981 se experimentó una baja considerable de los precios del petróleo en virtud de la disminu-

^{*} En "La evolución económica de América Latina en 1981", *Comercio exterior*, marzo de 1981. Por su parte, el Banco de México en su informe, véase *ibíd.*, abril de 1981, calcula que éste fue el orden del 8.3% en 1980 y del 8.1% en 1981.

ción de la demanda mundial de éste provocada por los cambios a largo plazo que se perfilaban en el mercado energético internacional. También la situación crítica por la que pasaban las economías capitalistas desarrolladas y el endurecimiento del proteccionismo de los Estados Unidos, país con el que México tiene el 75% de su actividad comercial y financiera, repercutieron en un desplome de los precios de otros productos mexicanos de exportación, con la consecuente disminución de los ingresos presupuestales previstos.

Aunque las repercusiones más espectaculares de esta baja no se dejaron sentir sino hasta mediados de 1982, momento en el cual estalló la crisis, dieron pie para que el gobierno (ante la inminencia de cancelar a corto plazo los programas agrarios, de industrialización y de empleo, que eran los que sacarían al país de la peligrosa petrolización en la que había caído) contratara nuevos empréstitos externos de corto plazo en condiciones financieras más duras. Esto aumentó peligrosamente el nivel de la deuda externa que en 1981 fue proyectada en 52 960.6 millones de dólares: 42 206.7 millones pagaderos a largo plazo y 10 753.9 a corto plazo (Cf. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Al mismo tiempo, se vio obligado, como medida de emergencia, a reducir en un 4% los gastos presupuestales en todas las áreas, lo que incidió directamente en la desaceleración del alto crecimiento que México había experimentado en los años precedentes. A estas alturas, la tan denegada petrolización que anunciaron aquellos "irresponsables" que pusieron en duda la política del *boom* petrolero empezaba a mostrar su verdadera cara. El petróleo había profundizado los desequilibrios sociales de un desarrollo económico que, a todas luces, se volvía a revelar como injusto, depredador y contrarrevolucionario, porque afectaba profundamente a las grandes mayorías del país. En efecto, la inflación, que en 1980 alcanzó el 30%, alimentada por las altas importaciones que en 1981 alcanzaron la cifra récord de 23 mil millones de dólares, y muy a pesar de los desmentidos oficiales, se acercó a fines de 1981 al 40%. Su incidencia directa en la depauperización del 80% de la población total compuesta de trabajadores: empleados, subempleados y desempleados, los cuales, en promedio, disponían de ingresos familiares de cinco mil pesos o menos para mantener a cinco o más miembros, era palpable.

Por otra parte, el desequilibrio externo, medido en términos de la balanza de cuenta corriente, experimentó un déficit de 11 704 millones de dólares, lo que volvió al país aún más dependiente económica y financieramente y contribuyó a generar, a la vez, un mayor desequilibrio fiscal. Todo ello contribuyó a la aceleración del proceso de desintermediación financiera, que ya se venía perfilando, a partir de un fuerte endeudamiento externo de las empresas privadas, provocado por los encarecimientos del crédito, dadas las altas tasas de interés internas. Las repercusiones directas de éste en la estructura productiva y en el sector petrolero fueron negativas: la producción industrial creció y el *boom* petrolero iniciaba su baja.

Así pues, para fines del 1981, aunque el informe de gobierno del primero de septiembre lo soslaya, ya que recoge los resultados del crecimiento

acelerado de los años anteriores, el panorama económico y financiero de México era sombrío. La política económica seguida en torno al auge petrolero revelaba su estrepitoso fracaso. Se había tratado de cubrir las brechas del crecimiento de la productividad mediante un endeudamiento externo sin precedentes para alejar la crisis, pero ésta se venía encima justamente por ese mismo lado. En el horizonte de fines de 1981 la crisis se vislumbraba ya, y con ella parecía alejarse la posibilidad de convertir las riquezas petroleras en un proceso de industrialización sobre bases permanentes y propias; pero también parecían desvanecerse las expectativas de un desarrollo más auténtico y democrático. El peso de las medidas económicas para detener la crisis no consiguió sino deteriorar todavía más los ingresos de los sectores sociales más desprotegidos. Por su parte, los trabajadores organizados, en su mayoría directamente articulados a la burocracia sindical, apenas pudieron alcanzar un aumento de un 38.5% en sus salarios mínimos, monto insuficiente para contrarrestar la pérdida acumulada del poder de compra. Los conflictos laborales, aunque no salieron del marco legal previsto por las instituciones de conciliación de los mismos, aumentaron considerablemente; la mayoría de ellos tenían el fin de romper el tope salarial del 30% impuesto por el gobierno, y el resto el de impedir los despidos selectivos y los ceses masivos con los que los empresarios respondían a la contracción económica que ya empezaban a experimentar (según datos de las organizaciones sindicales independientes, estos despidos y ceses masivos afectaron a más de 500 mil trabajadores del país).

En el plano sociopolítico, el gobierno, a menos de un año de las elecciones presidenciales y en pleno lanzamiento de la campaña electoral, se había debilitado considerablemente; no obstante, para no acelerar el paso de la crisis, que ya se veía como inevitable, intentaba negociaciones cada vez más infructuosas con los industriales, los comerciantes y los financieros que, estando en sus mejores tiempos, empezaban ya a sentir el peso futuro de la crisis, por lo que comenzaron a poner sus capitales a buen recaudo en el extranjero. En esos momentos, una política de endurecimiento de las medidas administrativas, para forzarlos a moderar sus expectativas de ganancia, resultaba inviable y podía conducir al enfrentamiento con el gobierno que, por otra parte, durante todo el sexenio los había estimulado con mayores incentivos de ganancias. Por otro lado, una política de movilización popular llevada a cabo por el gobierno para fundamentar decisiones capaces de poner diques de contención a las fracciones empresariales y en particular a los financieros e industriales monopolísticos, que se estaban convirtiendo en el eje de acumulación del desarrollo del capitalismo en crisis, implicaba un giro rotundo en favor de los sectores campesinos, obreros y populares. Lo último parecía contradecir el esquema de alianzas políticas ya esbozado en la campaña presidencial que el candidato del PRI desplegaba. Sin embargo, la salida política más viable a la crisis económica, que estaba por estallar, y que en el interior de los sectores nacionalistas y revolucionarios del mismo partido en el

poder se avizoraba, parecía ser el cierre de un nuevo pacto social con los sectores mayoritarios de la nación. Pero la coyuntura económica de crisis y recesión mundial y el agotamiento del desarrollo a base de los altos precios del petróleo jugaban en su contra, y las fuerzas sociales retardatarias estaban al acecho y no desperdiciarían la ocasión para imponerse.

Entre tanto, en la economía, las inversiones públicas y más aún las privadas ya no se realizaban como al inicio del auge petrolero, por lo que los riesgos de estancamiento de la producción eran inminentes. En el campo social, los efectos del auge todavía se hacían sentir, lo que aminoraba las tensiones crecientes entre los grupos sociales urbanos y los agrarios; las condiciones climáticas favorables permitían incrementos productivos del 5.5% al 6% que por segundo año consecutivo superaron las tasas de crecimiento demográfico, hecho que, sin incidir en un incremento del nivel de vida de los campesinos, sí les procuraba cierto desahogo económico. En el ámbito político, la campaña presidencial con siete aspirantes a la presidencia, hecho insólito en toda la historia del país, despertaba más que en otros sexenios ciertas expectativas de transformación que, poco a poco, se irían esfumando a medida que el bajo crecimiento económico, la inflación y la devaluación hicieron presa de las grandes mayorías populares.

A principios de 1982, la caída de las exportaciones petroleras y de otros productos tales como el café, el algodón y la plata pesaban duramente sobre la economía mexicana; no obstante, gracias al endeudamiento externo, la devaluación con la que se debía castigar la creciente inflación se había evitado. Sin embargo, la violenta expansión de la economía, que había llegado a un ritmo del 8 o 9% de crecimiento anual, junto con la creciente baja de los precios del petróleo y la recesión mundial de la economía, aceleraron aún más la inflación interna hasta su desbordamiento, después de un rezago de 3 años. Los precios al mayoreo entre 1977 y 1981 sólo crecieron del 16 al 25%; el tipo de cambio a su vez se mantuvo estable entre 22.5 y 23.5 pesos por dólar hasta principios de 1981 y durante el resto del año sólo alcanzó un descenso leve que lo condujo a 26.2 por dólar. En términos reales, el precio se había apreciado en un 30% con respecto a la devaluación de 1977. Según los datos de la banca privada, al deslizamiento del peso en 1981 sólo fue de un 12.8% pero la inflación fue mayor que la de los Estados Unidos en un 20% (*Uno más uno*, 10. de febrero de 1982), por lo que el mantenimiento del valor nominal del peso en los comienzos de 1982 castigaba duramente a las exportaciones no petroleras. Estas últimas literalmente se habían estancado disminuyendo notablemente en su volumen y en su valor absoluto; con repercusiones mayores en la ya deteriorada balanza comercial. También el turismo, segunda fuente de ingreso de divisas del país, experimentaba su segundo año de rezago, deteriorando aún más la balanza de servicios ya debilitada. Este déficit persistente de la balanza de pagos repercutió en una acelerada expansión de la deuda externa, calculada en 75 mil millones de dólares a fines de 1981 (SHCP y Banco de México), suma enorme cuyo pago

de intereses y amortizaciones del capital ponía al país al borde del colapso económico. Así pues, en 1982 la estrategia fácil de crecer a base del endeudamiento externo, hipotecando a futuro las riquezas petroleras, conducía a la alternativa de dejar de crecer y estancarse para pagar las deudas, con lo que los sueños del auge petrolero daban lugar a un amargo despertar de carencias y desajustes presentes y futuros.

El gobierno, ante la inminente crisis, no tuvo más alternativa que reconocer el fracaso de la fórmula de crecimiento tradicional, que se había vuelto preferencial en el último lustro, y en un comunicado del Banco de México, el 17 de febrero de 1982 anunciaba la primera de una serie de devaluaciones del peso que sobrevendrían en el obscuro año de 1982. Vino, enseguida, un "Programa de ajustes de la política de México" que intentaba detener el desbordamiento de las crisis cuando ya ésta había franqueado los diques de contención. Pero al transcurrir los meses, las medidas tomadas tornaron aún más duro el modelo de desarrollo desafiado en el avance implacable de la dominación monopólica en la economía del país. La inflación se aceleró, con la correspondiente escalada de los precios que hizo mella profunda en las economías de los sectores mayoritarios del país. El proceso de desacumulación interno que produjo la devaluación de febrero, en lugar de apaciguarse se acentuó. No sólo era la cantidad impresionante de dólares que el gobierno debía pagar por intereses y amortización de la deuda externa, sino un buen porcentaje de la plusvalía nacional que se dirigía al extranjero en forma de turismo, de inversiones foráneas o buscando protegerse de una nueva devaluación que se veía como inminente.

Además, la captación de dólares por parte de la banca privada y mixta, que a fines de 1981 representaba el 31.5%, creció más y con ello las utilidades de las fracciones financieras.* En la arena política, la crisis económica creciente empezó a rendir sus frutos. A raíz de los reajustes salariales de emergencia, exigidos por los obreros para mitigar el alza de los precios de los productos de primera necesidad, se vislumbró la creciente debilidad del gobierno frente a los empresarios, cuya agresividad verbal expresaba su creciente poderío económico y buscaba bases para influir directamente en las decisiones políticas presentes y futuras. Al parecer, el poder de decisión concentrado en el Estado, vale decir, en el juego de las fuerzas de las fracciones burguesas industriales nacionales, era disputado por las fracciones burguesas industriales, comerciales y financieras monopólicas que, al llegar a tener el dominio absoluto en el campo económico, intentaban dar el asalto al campo político y detentar la hegemonía social. Pero esta lucha que se evidenciaba en el campo económico a través de

* En un estudio realizado por el Banco de México se destacó que la mitad de las ganancias obtenidas por la banca entre enero y agosto de 1982 se originó en la compra de dólares al público con los cuales se especuló. Así pues, la banca privada y mixta ganó hasta el momento de la nacionalización de la banca 17 mil 498 millones 200 mil pesos, de los cuales 8 mil 622 millones 900 mil correspondieron a la "utilidad por cambios".

una política de austeridad contradictoria, con incidencias directas en los programas de alimentación y empleo destinados a contener los ya mermodos ingresos de las clases trabajadoras y que tenía como arma un monetarismo ultramontano, cuyos castigos a la pequeña y mediana industria contrastaban con los subsidios millonarios a los grandes capitales monopolíticos, resultaba más ardua y compleja en el campo político. Allí, la burocracia estatal, en sus más altos rangos y en sus destacamentos intelectuales más lúcidos, seguía todavía representando y apoyando la alternativa de la fracción burguesa industrial nacional frente al proyecto de las fracciones industriales y financieras monopolíticas, aliadas o dependientes del capital extranjero, y todavía fincaba sus esperanzas en la industrialización sobre bases propias como forma de lograr un desarrollo capaz de hacer justicia a las masas populares que fueron artífices de la revolución de 1910, casi ya extinguida pero en la cual todavía creen. No obstante, en mayo y junio de 1982 la coyuntura económica era especialmente difícil, pues la crisis de la producción arreciaba mientras la bonanza de los financieros iba en aumento, con las secuelas sociales de carestía alimentaria, alza de precios e inflación galopante, especulación cambiaria y ganancias fabulosas para la banca. En momentos, se hubiera podido pensar que la crisis, tan difícil de controlar a corto plazo, se le escapaba de las manos al gobierno y, con ello, se estaba al borde de un vacío de poder muy peligroso para el sistema político porque estaba mermando repentinamente las bases del consenso popular. Pero bien miradas las circunstancias, o sea, traspasando el campo de las meras evidencias, la incapacidad e ineficiencia del gobierno para poner coto a la inflación y a la escalada especulativa de los precios y del dinero, contribuían al fortalecimiento de los sectores comerciales, empresariales y financieros monopolíticos, cuyos desafíos al gobierno en el plano económico y político apuntaban no tanto a desconocer al Estado que los apoyaba y sostenía, sino a contribuir con mayor fuerza al deterioro de la capacidad de lucha de los sectores obreros, campesinos y populares que, junto con los sectores medios asalariados, venían soportando casi todo el peso de la crisis económica.

No se trataba, pues, de una pérdida del consenso social sino de un deterioro político de las organizaciones de masas, tanto de las unidas al yugo del gobierno por la intermediación del PRI como de las independientes, demasiado débiles aún como para poder presentar alternativas de cambio a toda la sociedad mexicana.

En estas circunstancias, las estrategias de austeridad y sacrificio, impuestas a las clases trabajadoras para sostener los intereses de la burguesía industrial en crisis y/o fincar las bases para cimentar la nueva hegemonía de las fracciones financieras monopolíticas, podían aún profundizarse sin peligro de generar tensiones directamente encaminadas a desquiciar el sistema político de dominación y sus instituciones de consenso.

Por otra parte, aunque la crisis ya revelaba algunos indicios de descomposición social entre los sectores semiproletarios y subproletarios de las urbes más pobladas y aunque los sectores medios y de profesionales sentían

en carne propia el deterioro de un sistema político (colmado por una serie de arbitrariedades y corruptelas de la burocracia administrativa, incapaz del buen manejo de los servicios necesarios para la convivencia social, vale decir, el transporte, la limpieza y las obras de infraestructura y vivienda), no se había quebrantado todavía en el ánimo del pueblo mexicano la esperanza de una salida airosa, como acaeció durante la crisis de 1976.

El clima de cierre de campaña electoral que imperaba a la sazón, las expectativas puestas en las promesas del candidato del PRI, quien el 4 de julio de 1982 se convertía en el presidente de todos los mexicanos, ratificando así la hegemonía absoluta del partido del gobierno, contribuyeron a paliar los efectos directos del deterioro acelerado que la economía del país sufría en los inicios del segundo semestre del año, dentro del cual la crisis estalló.

Se tenía la impresión, y éste era el comentario público, de que el gobierno sólo esperaba las elecciones y sus resultados inmediatos para, tácticamente, después de un discurso engañoso y soporífero de que “la crisis estaba controlada”, anunciar que ésta había tomado un curso acelerado y que lo peor aún no llegaba. Efectivamente, a finales de julio se dieron alzas de hasta el 200% en algunos artículos; los aumentos al precio del pan y las tortillas, alimentos de consumo masivo, y los de la gasolina y el gas que siguieron en los primeros días de agosto recrudecieron la inflación. Pero esto no fue lo último ni lo más duro del año; la espectacular devaluación que se produjo con el “nuevo retiro del Banco de México del mercado de cambios” el 5 de agosto, y que era una forma disfrazada de presentar un “control de cambios dual”, justamente en el momento en que las divisas ya se habían agotado, dieron más bríos a la crisis, que se presentó con una inflación galopante de más del 100% a fines de agosto.

Así, se llegaba al estallido de la crisis, y con ella se expresaban plenamente el profundo deterioro estructural junto con la espuma ilusoria del auge petrolero. En momentos se sintió como que el estallido la había vuelto casi ingobernable, lo que constituía una amenaza inminente de destrucción del resquebrajado conjunto de instituciones sociales que sostenían al sistema. El gobierno, en este trance, no tenía más alternativa que la de ser arrastrado por la vorágine de la crisis o emprender un viraje profundo de su política económica mediante una decisión política encaminada a recuperar el terreno que la burguesía industrial venía perdiendo frente a los sectores financieros. Se optó, en la desesperación, por la segunda alternativa. Así pues, el primero de septiembre, en su último y memorable informe, el presidente que pocos meses después dejaría el poder anunciaba, una vez que ya había descrito la bancarrota del país, la nacionalización de la banca mexicana y el control estricto de cambios. Con este *tour de force*, increíble para la mayoría —dada la trayectoria de un gobierno que había no sólo tolerado, sino impulsado el fortalecimiento de los sectores comerciales y empresariales monopólicos y había acelerado el pleno desarrollo de las fracciones burguesas financieras con la modernización del sistema

bancario, procurándole las tasas de utilidades más altas del mundo (superiores al 108% anual en el período 1976-1982)— la fracción burguesa industrial en crisis retomaba el timón de mando del Estado. Volvía, así, a recuperar, con el consenso social que parecía estar perdiendo entre los sectores populares y nacionalistas, la hegemonía que estaba en entredicho.

Por otra parte, y con gran lucidez política, el gobierno arrebató a la izquierda en crecimiento una de sus banderas más queridas y la dejaba, por un momento, inerte y expectante. Su despertar estuvo encaminado a profundizar la nueva política de la nacionalización bancaria en todas sus consecuencias preñadas de cambios profundos a corto y largo plazo en beneficio de los sectores populares; pero el gobierno nacionalizador y luego el que lo relevó al borde de su descenso político, insistió en la salida de la crisis como forma de recuperación, en un plano superior, de los desajustes y contradicciones del sistema capitalista mexicano en crisis.

De este modo, la nacionalización bancaria, el hecho político y social más relevante desde la nacionalización del petróleo en 1937, sin posibilidades de ser rescatada como una conquista popular para morigerar la crisis en beneficio de las grandes mayorías, sirvió para consolidar, por algún tiempo, a la ya debilitada fracción industrial nacional, presionada en su pedestal político por la fracción financiera a la que se le arrebató el instrumento principal de sus ganancias.

La reacción empresarial a la expropiación bancaria llegó, aunque con menor vehemencia de lo que se hubiera podido imaginar; tal vez porque se pensaba revocar, en la práctica, la medida o emprender negociaciones ventajosas en un plazo de tres meses con el nuevo presidente; o bien porque, al parecer, la capacidad de acción política de éstos para movilizar a los sectores sociales en contra del gobierno saliente era limitada. No obstante, en los meses finales del sexenio que inauguró la crisis más álgida de la historia de México y realizó la nacionalización bancaria, la sorda resistencia que los banqueros opusieron en el ámbito económico y político hizo mella directa en el quebrantado sistema económico en crisis: esto les permitió consolidar una no despreciable base política para pactar con el nuevo gobierno una participación del 34% en la banca nacionalizada y una jugosa indemnización que empezó a hacerse efectiva poco antes de cumplirse el año de la, para ellos, “arbitraria e inconstitucional medida” que encaminaba al país al “socialismo totalitario”.

IV. En la pendiente de la crisis inflacionaria y recesiva, 1983; posibles alternativas

Las medidas desesperadas con las que se pretendió frenar el estallido de la crisis mostraron que ésta revestía una gravedad y profundidad nunca antes alcanzadas. En menos de seis meses, con las diferentes modalidades de control cambiario que se ensayaron, el peso mexicano pasó de 27 por

dólar a los 200 en los momentos de mayor especulación, vale decir, una devaluación del 640% para luego ser fijado a fines de diciembre en 150 pesos por dólar; paridad que, con ligeras fluctuaciones, conserva en la actualidad; todo esto si nificó un 445% de decremento en menos de 6 meses.* Pero la inflación continuó enraizándose en la economía mexicana a pesar de que el Banco de México afirmaba lo contrario. En los meses de enero y febrero de 1983 alcanzó el 110% en relación al mes de agosto de 1982. En lo relativo a los precios, éstos no dejaban de aumentar; desde agosto, algunos de los productos habían triplicado, otros cuadruplicado y hasta quintuplicado su precio. El convenio del gobierno con el FMI funcionaba de maravilla y junto con sus exigencias de reducir el gasto público se aumentaron los impuestos y se elevaron, una vez más, los precios de los bienes y servicios públicos, hecho que también fue aprovechado para atizar el fuego inflacionario que devoraba rápidamente los recursos de los sectores populares y medios. En esa época ya operaba el nuevo gobierno, que inició su gestión con un "Programa de reordenamiento económico emergente" destinado a corregir la inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas, así como a proteger la planta productiva y el empleo para prevenir tensiones sociales (De la Madrid, 1982).

Los inicios de la recesión económica al clarear el año de 1983 fueron difíciles; no obstante, los gastos y diversiones ya tradicionales de Navidad y Año Nuevo, así como las esperanzas depositadas por el pueblo en el cambio ritual de cada sexenio, crearon un compás de espera en la vida política del país. Por otro lado, el gobierno intentaba amagar el costo social de las nuevas medidas de ajuste mediante el control selectivo de algunos precios de los alimentos de consumo masivo y de productos de primera necesidad; también se siguió subsidiando el transporte colectivo y se multiplicaron las tiendas sindicales con el fin de proteger la economía de los sectores más vulnerables a la crisis y con ello preservar la paz social, fuertemente amenazada por el colapso económico.

A estas alturas, con mucha habilidad pero a costa de severas medidas económicas, cuyas repercusiones en los sectores trabajadores y medios asalariados ya venían afectando fuertemente sus escasos niveles de vida, el nuevo gobierno había negociado con el FMI la cuantiosa deuda externa, pero también había logrado asentarse políticamente; además, ya tenía entre manos una serie de iniciativas jurídico-institucionales para operar sobre la crisis. La celeridad con que fueron aprobadas las medidas, a más de reiterar el peso absoluto que el gobierno tenía en las cámaras a través del PRI, revelaba la gravedad no sólo del momento, sino del futuro y el temor bien fundado de posibles desbordamientos sociales y desequilibrios políticos que podrían sucederse por lo drástico de las estrategias adoptadas. Efectivamente, la presión de la recesión productiva, anunciada oficialmen-

* Con esta paridad tope llamada "libre" a la que irían acoplándose la "controlada" y la "especial" que luego fue suprimida, la moneda mexicana se mantiene hasta los primeros días de septiembre de 1983, fecha en que los temores de una nueva devaluación y una nueva escalada inflacionaria son del dominio público.

te con **tasas** negativas de menos **2%** fue mucho más severa ya que tuvo entre enero y abril de 1983 un promedio ponderado de menos **9.6%** (Banco de México, 1983), por lo que sus impactos fueron más significativos que los calculados en los niveles de salario y en la estructura del empleo. No sólo se dieron problemas de desabastecimiento de productos básicos, sino olas de carestía provocadas por el ocultamiento de alimentos y mercancías para especular con los precios y obtener ganancias exorbitantes. En las urbes el clima instaurado por la recesión económica propicia un ambiente de psicosis y de tensión social que lleva a una rápida descomposición de los sectores marginales y lumpemproletarios que degenera en asaltos, robos a mano armada, vale decir, criminalidad y violencia social; todo ello como consecuencia de la represión económica a la que son sometidas las capas más vulnerables de la población por la inflación que sobrepasa el 100%. Pero no sólo aquéllas; los trabajadores también son literalmente desfalcados por la crisis inflacionaria que sobrepasa el 100% mientras los incrementos salariales que el gobierno autoriza llegan al porcentaje ridículo del 15 ó 20%. En mayo, la tasa inflacionaria llegó hasta el 120% y el incremento promedio de los precios en los 5 primeros meses ascendía a 36%, lo que permitía inferir que la recesión no había alcanzado fondo y que la furia de la crisis aún no había sido sometida, a pesar de las declaraciones oficiales.

En este panorama de debilitamiento de las fuerzas sociales mayoritarias, los sectores comerciales y financieros monopólicos internos, en alianza con sus congéneres externos, intentaron presionar al gobierno para obtener subsidios todavía más jugosos que los que éste les había generosamente otorgado para persuadirlos, por un lado, a morigerar el aumento casi diario de los precios y, por el otro, para incentivarlos a invertir en productos básicos; mientras, se castigaba a las clases trabajadoras que luchaban por obtener aumentos de emergencia en sus salarios devaluados.

Ya desde el segundo trimestre de 1983, los impactos retardados de las medidas de política venían carcomiendo los ahorros que los sectores medios habían acumulado en los años de auge petrolero. En el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Veracruz, Villahermosa, Mexicali y Tijuana el costo de la vida se incrementa en más del 300% mientras los sueldos y salarios de los obreros, profesionales y burócratas permanecen estancados y se consumen con la inflación que, aunque alcanzó un ritmo menor que en los primeros meses de 1983, no fue controlada. Los estados fronterizos del norte, que poco antes disfrutaban de condiciones económicas de excepción, con las medidas adoptadas para proteger la economía nacional han decaído notablemente en el comercio y demás transacciones con Estados Unidos, lo que ha repercutido en los niveles de vida y de empleo de sus habitantes. Lo anterior ha motivado no sólo la profundización de las desigualdades sociales, sino que ha permitido el afloramiento del descontento contra el gobierno y la burocracia de funcionarios, a quienes se culpa por la crisis que allí se vive. En los estados del sureste, los impactos negativos de la petrolización se dejan sentir con toda su

fuerza, pues han hecho estragos sobre la agricultura y la ganadería, por lo que la escasez de fuentes de trabajo conduce al acelerado ritmo de deterioro de las condiciones ya precarias, no sólo de los campesinos que allí vegetan sino de los asalariados y profesionales medios; estos últimos han visto mermar sus ingresos en casi la mitad. En los estados del centro y del oeste y en los que dependen directamente del Distrito Federal y viven, al mismo tiempo, de la industria, de la agricultura y del turismo —Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Michoacán y Guerrero, y también Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Colima— la recesión con inflación de precios y desempleo también ha causado graves deterioros económicos y desequilibrios sociales. Todos estos desajustes presagian, en caso de profundizarse la depresión de la economía y de las finanzas, tensiones políticas y descontentos que se expresaron ya en las primeras elecciones de junio, sobre todo en los estados de la frontera norte, y probablemente las que se realizarán durante el resto de este año podrán depararnos algunas sorpresas que podrían mermar las bases de apoyo político del gobierno actual (obligado a reprimir económicamente a las grandes mayorías, pero deseoso de ampliar la participación política para capear el recio temporal de la crisis).

En los meses de mayo y junio, dadas las crecientes dificultades para el despegue de la economía, crecieron las tensiones sociales entre los sectores obreros, profesionales y burocracias asentadas en los sectores modernos del país. Como nunca antes había sucedido, los tradicionales aumentos salariales que el gobierno anunciaba el primero de mayo para los obreros no se concedieron, pues, al contrario de lo que se había enfáticamente declarado: “la crisis la sobrellevarían todos” y que sus impactos “por vez primera, deteriorarían las condiciones de vida de todos los mexicanos”, en realidad la crisis volvía a recaer con todo su peso sobre las espaldas de los campesinos, los obreros y los sectores medios urbanos, aunque sólo los dos últimos podían expresarse institucionalmente en contra por la vía de la huelga (según el Secretario de la Confederación General de Trabajadores —cgt—, más de 11 mil emplazamientos a huelga fueron anulados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje).

Por todas las razones aducidas, a finales de mayo, cuando el país apenas podía subir la cuenta del primer semestre de 1983, el gobierno anunciaba el Plan Global de Desarrollo, cuyos objetivos básicos —“de conservación y fortalecimiento de las instituciones democráticas, de vencimiento de la crisis y de recuperación de la capacidad de crecimiento del país, para luego iniciar los cambios cualitativos que el país requiere en sus estructuras económicas, políticas y sociales”— en lugar de ser una esperanza inmediata de contención de la crudeza de las condiciones precarias en las que se encontraban los trabajadores y las grandes mayorías del país, más parecían un discurso etéreo sin mayor trascendencia política inmediata. Así lo entendieron los trabajadores del país, quienes para protestar contra la política económica del régimen y para pedir aumentos salariales de emergencia que oscilarían entre el 50 y 100%, iniciaron una ola de paros, huel-

gas y manifestaciones que **terminaron a finales de junio**. Los resultados de la mayoría de estos esfuerzos de sobrevivencia fueron mayores frustraciones, en virtud de las **características de represión económica e indirectamente política** que toman las negociaciones; unos cuantos terminaron en mínimos incrementos de 15%, en promedio, a los sueldos y salarios, los que son absorbidos inmediatamente por la inflación. En efecto, si bien aquélla había cedido un poco a partir de mayo, a fines de agosto parece recrudecer y, seguramente, repuntará en los últimos meses de este año, si, como ya se anuncia en la prensa para auscultar o preparar psicológicamente los ánimos de la población, se dan nuevos aumentos en los precios de los alimentos básicos y en los derivados del petróleo; de ser así, se calcula que para los primeros meses de 1984 la inflación rebasará la barrera del 120%.

Así pues, en un clima de tensiones crecientes finaliza el tercer trimestre del año de 1983. La crisis económica no parece ceder, aunque se reitera que ya está controlada; de este modo, las condiciones sociales de los sectores mayoritarios del país siguen empeorando mientras los grupos monopólicos siguen, por la vía inflacionaria y la especulación de los precios, acumulando poderío económico y disputando, palmo a palmo, el poderío político y, con él, tratando de captar la hegemonía social que la burguesía industrial nacional aún detenta.

Parece difícil que la burocracia y tecnocracia políticas, que sostienen en la cumbre del poder a esta fracción, puedan o alcancen a salvarla sin la ayuda de los sectores campesinos, obreros y populares que, unidos al gobierno en el interior del PRI, esperan con el informe del primero de septiembre (el primero de esta presidencia, marcada por la recesión del desarrollo y la inflación) una tregua que les permita recuperar sus fuerzas y seguir por un tiempo apoyando la declinante hegemonía de la burguesía nacional. De no ser así, las amarras del yugo de subordinación podrían ceder, no tanto como para sacudir el peso de la dominación política que sustenta la explotación que padecen las mayorías, sino para que este grupo busque, en la unidad con los movimientos sindicales y obreros independientes, nuevas alternativas para consolidar su capacidad de movilización y renovar sus luchas para enfrentar, con autonomía de acción, la escalada de las fracciones financieras monopólicas. En este caso, estaríamos asistiendo a un desmoronamiento del sistema político corporativo sobre el cual se fundamenta el autoritarismo del régimen vigente y presenciando una crisis política interna en el mismo sistema de dominación, que podría ocasionar tensiones y desajustes sociales de gran importancia política. Por su parte, las fracciones financieras integrantes del bloque en el poder, pero no hegemónicas, con toda seguridad seguirán tratando de liquidar todo intento de organización popular nacionalista y revolucionaria, porque con ella su proyecto de desnacionalización, de represión económica y política —que esconde y fundamenta una explotación capitalista más intensa para superar la crisis interna y que conlleva la internacionalización del capital a escala mundial— no podrá alcanzar el consenso social que necesita para arraigarse en México.

En fin, la lucha de la fracción burguesa industrial nacional —cuya hegemonía parece en descenso pero que aún dispone de la fuerza política para salvaguardar su proyecto y superar la crisis económica— contra las fracciones comerciales, industriales y financieras monopólicas, ligadas o dependientes del capital trasnacional, no se podrá dar sin el concurso de las grandes mayorías de la población. Para que éste pueda hacerse efectivo, parecen ser necesarias ciertas reformas de fondo en la economía y en la política que aún no se vislumbran. En el caso de que las tendencias recesivas y la inflación sigan profundizándose y, con ellas, haya un mayor deterioro económico y social de estos sectores, no parece previsible un desenlace violento de las fuerzas sociales en un corto plazo, pero sí un deterioro cada vez más profundo de las instituciones estatales que constituyen, hasta ahora, los puntales del consenso social que los diferentes gobiernos han tratado de preservar y consolidar mediante políticas económicas de gasto social prioritario, todo ello como fórmula eficaz para obtener apoyo directo de las grandes mayorías a cambio de su control y dirección política. Al “realismo económico” puesto en marcha como bandera del presente sexenio (entendido como mecanismo para restaurar el libre juego de las fuerzas del mercado, pero que en realidad resulta ser el camino más fácil para que las fuerzas monopólicas nacionales y extranjeras, estructuralmente más fuertes que las otras, obtengan el señorío en la economía y luego en toda la sociedad), cabe también oponer el “realismo político” para fortalecer a las fuerzas sociales más debilitadas: las grandes mayorías populares. De otro modo, no es nada extraño que en el escenario futuro de las luchas por el poder, el consenso social se debilite y, por tanto, empiecen a vislumbrarse en el horizonte de la formación social mexicana no tanto las fuerzas de la represión económica ya presentes, sino las fuerzas desnudas de la dominación, por largo tiempo escondidas en un Estado corporativo y populista. Este hecho repercutiría necesariamente en desequilibrios de extrema gravedad que podrían romper la ya larga estabilidad del régimen sociopolítico imperante.

Lo que sí es cierto, pero vale la pena recordarlo al final, es que la crisis actual, aunque puede depararnos tantas otras salidas diferentes de las aquí destacadas, constituye un reto para toda la sociedad mexicana, que no saldrá airosa sino mediante la superación de las actuales contradicciones sociales a partir de soluciones nuevas que sólo la participación directa de toda la sociedad puede dar a los grandes problemas que hoy enfrenta; éstos, en su gran mayoría, sin ser los únicos, son el resultado del auge y de la quiebra de la acelerada modernización capitalista de los últimos 30 años.

La polarización antagónica que este proceso macrosocial, nacional y multinacional ha engendrado, a saber: las grandes mayorías exentas de toda participación social, exceptuando el voto restringido, y las escasas minorías que han participado plenamente a costa y con el apoyo de las anteriores, hacen cada vez más insolubles los problemas sociales. Por ello, en esta solución las grandes mayorías tienen la alternativa y junto con ellas las fuerzas sociales fundamentales que sean capaces de conducirlas.

¿La izquierda mexicana, hoy débil y minoritaria, podrá afrontar el reto que la actual situación crítica plantea? ¿Podrá el PRI despojarse de todas sus cenizas y, como el ave fénix, volver a encender la llama del nacionalismo revolucionario casi ya extinguida, cuyos postulados de democracia social con participación de las grandes mayorías sólo han sido una formalidad contradicha por la historia del pueblo mexicano? O bien, ¿serán las fuerzas retrógradas que, a contracorriente de la historia, predicán la salvación de México por la vía del neoliberalismo autoritario y moralizante, las que logren de nuevo uncir a las masas populares al yugo de una participación formal más excluyente de una participación real del pueblo y de los sectores dominados en la resolución de sus propios problemas? Éstas son las preguntas que, por el momento, quedan sin respuesta, pero que tendrán que resolverse junto con la crisis. Las alternativas que de allí resulten darán al desarrollo real del capitalismo su particular fisionomía, y, de hecho, el México moderno, su nueva historia, la de sus contradicciones políticas, económicas y sociales, tendrá incidencia casi directa en el porvenir del capitalismo en América Latina, más concretamente en América Central, y de este modo podrá contribuir a su declinación o consolidación mundiales.

Bibliografía

- Alcocer, J. (1981), "El dominio del capital financiero: notas de coyuntura", en *Economía petrolizada*, Taller de Coyuntura, Facultad de Economía-UNAM, México.
- Basáñez, M. (1981), *La lucha por la hegemonía en México, 1968-1980*, Siglo XXI, México.
- Bueno, G. (1977), *Opciones de política económica en México después de la devaluación*, Tecnos, México.
- CEPAL (1979), "México: notas para el estudio económico de América Latina, 1978", Rev. 3, mayo.
- Cordera, R. (1972), "Estado y desarrollo del capitalismo tardío y subdesarrollado; síntesis de un caso pionero: México 1920-1970", en *Investigación Económica*, núm. 123.
- Fitzgerald, E. V. K. (1978), "La política de estabilización en México: el déficit fiscal y el equilibrio macroeconómico de 1960 a 1977", en *Investigación Económica*, Facultad de Economía-UNAM, México, abril-junio.
- Flores de la Peña, H. (1976), *Teoría y práctica del desarrollo económico*, FCE, México.
- González, E. (1977), "La política económica de LEA, 1970-1976: itinerario de un proyecto inviable", en *Investigación Económica*, núm. 3.
- González Casanova, P. (1979), *México hoy*, Siglo XXI, México.
- Gramsci, A. (1967), *La formación de los intelectuales*, Grijalbo, México.
- Labastida, J. (1972), "El régimen de Echeverría; perspectivas de cambio en la estrategia de desarrollo y en la estructura de poder", en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. XXXIV, México.

- López Portillo, J. (1976), "Aspectos económicos. Discurso de la toma de posesión del presidente de México", en *Comercio Exterior*, vol. 26, núm. 12, México.
- Madrid H., Miguel de la (1982), "Mensaje a la nación" y "Criterios generales de política económica para 1983", en *Comercio Exterior*, núm. 12. México, Banamex (1983), "Examen de la situación económica de México", vol. 49, núm. 691, junio.
- México, Banamex (1971), "México en cifras", Suplemento de "Examen de la situación económica de México", p. 32-34.
- México, Nafinsa, *La economía mexicana en cifras*.
- Ortiz Mena, A. (1969), "Desarrollo estabilizador, una década de estrategia económica en México", en *El Mercado de Valores*, núm. 44.
- Reynolds, C. W. (1977), "Why Mexico's stability development was actually destabilising (with some implications for the future)", en *Subcommittee on Inter-American Economic Relationships, Hearings*, Congress of the United States, Washington.
- Solís, L. (1977), "A monetary will-on-the wisp: Pursuit of equity through deficit spending", Princeton University, Woodrow Wilson School, Discussion Paper 77.
- Tello, C. (1979), *La política económica en México, 1970-1976*, Siglo XXI, México.
- Villar, S. del (1979), "El manejo y la repercusión de la economía mexicana en crisis (1976-1978)", *Foro Internacional*, El Colegio de México, abril-junio.